

Geopolítica de la violencia en América Latina en 2010

Jerónimo Ríos Sierra
Heriberto Cairo Carou

La relación entre inseguridad y violencia plantea una difícil tesitura de gobernabilidad en buena parte de los Estados de la región, además de erigirse en una amenaza de índole trasnacional que repercute muy negativamente en aspectos varios como el PIB y el mercado laboral, el capital social, la calidad de vida o el propio proceso democrático (Banco Interamericano de Desarrollo, 1998).

Además, violencia e inseguridad se han consolidado como la principal preocupación de la ciudadanía latinoamericana a tenor de los últimos datos del Latinobarómetro (2011), lo que parece explicar el proceso de creciente militarización de la seguridad pública que acontece en muchos Estados de América Latina y que confiere especial protagonismo a las Fuerzas Armadas en aspectos de seguridad ciudadana.

De este modo, se espera que las siguientes líneas sirvan para entender a grandes rasgos el alcance y el sentido que violencia e inseguridad han representado en América Latina a lo largo de 2010 y que exigen de importantes esfuerzos por parte de los Estados por consolidar una función garante de la seguridad que en muchas regiones, cuando menos, parece quedar en entredicho.

Violencia política en América Latina

Por lo general, la violencia se plantea dentro del continente latinoamericano como un factor desestabilizador de orden interno, que emerge

como consecuencia de una serie de factores tanto individuales (edad, género, nivel educativo o socialización de la violencia) como socioeconómicos (exclusión social, desempleo, inequidad, crimen organizado, corrupción).

No obstante, las posibilidades de hablar de la violencia como fenómeno son muy amplias, si bien un punto de partida puede pasar por distinguir aquellos casos en los que en su ejercicio, el Estado deviene como actor de la misma o por el contrario, como simple escenario de representación de las pautas violentas que se desarrollan dentro de su sociedad.

En el primer caso, se suele hablar de violencia política. Si en el pasado era frecuente, con la llegada y consolidación de las democracias a la región, la violencia expresada en forma de torturas y desapariciones forzadas a cuenta del Estado, o en la concurrencia de grupos guerrilleros que disputen el poder político al mismo, ha quedado reducida en sus expresiones más llamativas a dos casos. Por un lado, Colombia, donde el conflicto armado subsiste todavía desde hace décadas, y por otro, Perú, una minúscula fracción de la guerrilla Sendero Luminoso, “Proseguir”, subsiste.

Hablar en la actualidad de violencia de Estado obliga a mirar especialmente a Colombia, donde recientemente saltaron a la luz dos asuntos violentos que empañaron sobremanera la credibilidad institucional del Estado: los “falsos positivos” y la “parapolítica”.

En lo referente al caso de los “falsos positivos”, suponen un caso flagrante de violencia política y de vulneración de los derechos humanos por parte del Estado colombiano, en la medida de que representan ejecuciones sobre civiles asesinados por miembros del ejército, que posteriormente fueron presentados a la sociedad como guerrilleros abatidos bajo el propósito de engrosar las cifras del conflicto y legitimar el gasto en seguridad y defensa de la administración Uribe (2002-2010). Hasta el momento, Cinep (2011) ha denunciado un total de 562 casos y 1,119 víctimas, si bien la Fiscalía General de la Nación apenas reconoce a la mitad de las víctimas y tiene a una tercera parte de los casos por el momento paralizados.

Por su parte, la “parapolítica” puede ser el escándalo de violencia política más relevante acontecido en los últimos años en América Latina, al representar un punto de encuentro entre grupos narcotraficantes y paramilitares con partidos políticos y grupos empresariales, y que ha terminado por trascender de la esfera local al ámbito departamental y a las instituciones nucleares del Estado de Derecho colombiano como el Congreso o el Senado.

En abril de 2010, la cifra de imputados por esta cuestión afectaba a más de 400 políticos, de los cuales 80 eran congresistas, 109 funcionarios públicos, 324 integrantes de la fuerza pública y más de 5,000 ciudadanos. En total, se estima que en 2010 una tercera parte de alcaldes, gobernadores y congresistas que comenzaron la legislatura en 2006 fueron apoyados por grupos narco-paramilitares, y a los que habría que añadir 4% más, derivados del apoyo de la guerrilla, en un ejemplo de patrimonialización del Estado y del poder político colombiano al servicio del interés compartido por determinadas elites políticas y económicas del país y grupos armados (López, 2011).

Igualmente residual en América Latina es la violencia interestatal, la cual a lo largo del pasado siglo xx ha tenido una escasa relevancia, predominando más bien ciertas disputas territoriales fronterizas. El último foco de tensión interestatal más relevante en el continente latinoamericano fue resultado de la puesta en marcha de la “Operación Fénix”, en 2008, cuando Colombia bombardeó en Angostura, un territorio fronterizo de Ecuador, el campamento donde se encontraba el líder de las FARC, “Raúl Reyes”. Ello trajo consigo una grave crisis diplomática entre el gobierno de Álvaro Uribe, Ecuador y Venezuela, que llegó a su punto mayor en julio de 2010, cuando Venezuela rompió relaciones con Colombia.

Empero, la llegada de Juan Manuel Santos, en agosto de 2010, a la presidencia de Colombia ha traído consigo una nueva normalización dentro del escenario andino, reactivando las relaciones comerciales con Venezuela y acordando con ésta —en noviembre de 2010— un programa de cooperación recíproca en materia de crimen organizado y de intercambio de experiencias en aspectos de seguridad y defensa.

De esta manera, la tendencia de los últimos años en América Latina pasa más por favorecer puntos de encuentro que permitan desarrollar fórmulas de resolución pacífica de conflictos (Ruz, 2011). Así sucedió, por ejemplo, con la crisis fronteriza desencadenada entre Costa Rica y Nicaragua como consecuencia de los usos del margen del río San Juan, que si bien fue elevada el 13 de noviembre al Consejo Permanente de la OEA, rápidamente quedó resuelta.

Del mismo modo, Unasur y sobre todo el Consejo Suramericano de Defensa a lo largo de 2010 han trabajado en aras de fortalecer y avanzar en los mecanismos de formulación e implementación de medidas de confianza recíproca sobre la base de un mayor intercambio de información, un desarrollo de prácticas militares conjuntas o el fomento de la transparencia en el gasto militar de los diferentes Estados de la región (Niño, 2011).

La tendencia pues, en 2010, ha sido la de normalizar y reducir el nivel de tensión interestatal, tal y como evidencian la recuperación de las relaciones diplomáticas entre Perú y Bolivia —que llegaron a un acuerdo para facilitar el acceso comercial de Bolivia al Pacífico— o entre Perú y Chile y Argentina y Uruguay —a tenor de los cambios en la presidencia del gobierno tanto chilena como uruguaya.

Algunos condicionantes de la violencia en América Latina: exclusión social, narcotráfico y tráfico de armas

Antes de observar parte de las representaciones de la violencia que tienen lugar dentro de la sociedad latinoamericana, conviene detenerse en algunos de los condicionantes que de un modo más preocupante sirven de soporte para su desarrollo. Tanto la exclusión social y la falta de oportunidades económicas como el narcotráfico y el tráfico de armas de fuego representan tres factores sumamente relevantes, que se retroalimentan entre sí, y que evidencian hasta qué punto violencia e inseguridad se relacionan con la debilidad institucional del Estado de Derecho y la ausencia de mecanismos de control y regulación.

En lo referente al componente social, la inequidad, acompañada de factores concomitantes como la pobreza, la exclusión, la marginalidad, el desempleo, la falta de oportunidades, la frustración o las privaciones económicas, constituyen en suma un caldo de cultivo óptimo en la emergencia de la violencia dentro de América Latina. La pobreza y la indigencia afectan a más de la mitad de la población en países como Honduras, Nicaragua, Guatemala o El Salvador. Mientras, la desigualdad en la distribución de la riqueza resulta especialmente relevante, además de en Centroamérica, en otros países como Colombia, Brasil o México, guardando una fuerte correlación con la violencia y con la tasa de homicidios por cien mil habitantes, tal y como se verá con posterioridad.

Dentro de esta dimensión de relación de la dimensión social con la violencia como forma de obtención recursos al amparo de la ausencia del Estado, un claro ejemplo lo representan las maras y pandillas juveniles de Centroamérica. Éstas emergen dentro de un clima carente de mecanismos de control social, convirtiéndose en una importante amenaza a la seguridad regional y que es responsable, por ejemplo, de la cuarta parte de los más de 6,000 homicidios que en 2010 se registraron en Guatemala.

Otro condicionante de la violencia que no puede pasarse por alto es el narcotráfico, especialmente relevante por su proyección transnacional y por su elevado grado de sofisticación y de penetración dentro del poder público.

Hoy por hoy, entre Perú, Bolivia y Colombia se concentra el cultivo mundial de coca, que según UNODC (2011a) ascendió en 2010 a 149,100 hectáreas, esto es, 9,700 hectáreas menos que el año anterior. Sin embargo, tal reducción, focalizada principalmente en Colombia, debe de relativizarse a tenor del aumento experimentado en la producción de pasta de coca, tanto en Perú (38%) como en Bolivia (112%).

Este narcotráfico, íntimamente ligado con la violencia, la criminalidad, la corrupción institucional y el sicariato, fue objeto de especial atención en la xxxv Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA, celebrada a finales de junio de 2010, donde se aprobó la celebración, a finales de 2010, de la II Cumbre Regional sobre el Problema Mundial de las Drogas, Seguridad y Cooperación. El propósito es avanzar, por parte de los 24 Estados participantes, en programas de coordinación e intercambio información, así como en el desarrollo de un programa de observación y monitoreo nacional.

La amenaza regional que representa el narcotráfico en América Latina repercute directamente en Estados Unidos, primer consumidor mundial de cocaína, que concibe este problema como causa de inestabilidad regional dentro de una estrategia de control militar del continente (Preciado, 2009).

Ello ha supuesto la necesidad de incorporar mecanismos de erradicación de cultivos ilícitos y lucha contra el narcotráfico como el Plan Colombia, rubricado en 1999 entre los gobiernos de Andrés Pastrana y Bill Clinton y que ha sido continuado por George Bush, Barack Obama y Álvaro Uribe, suponiendo, desde entonces, un montante total para Colombia de aproximadamente 8,000 millones de dólares.

Bajo la misma consideración debe entenderse la Iniciativa Mérida, resultante del acuerdo en 2007 entre George Bush y Felipe Calderón, y que en 2010 cumple su tercer año de ejecución con una cifra total que asciende a 1,400 millones de dólares, y de los cuales, para 2010, se ejecutarán algo más de 200 millones del lado mexicano, y otros tantos del estadounidense. Pese a la trascendencia de este programa, conviene señalar que las cifras que arroja la *guerra* al narcotráfico declarada por el gobierno de Calderón desde finales de 2006 no parece resultar esperanzadora: si la tasa de homicidios vinculados al crimen organizado en México en el

año 2006 era de 2,221 muertes, en 2009 alcanzaba las 8,281 víctimas y en 2010 las 15,273 (Benítez y Rodríguez, 2011).

No obstante, se está lejos de pensar en una reducción de la cooperación policial-militar estadounidense en la región a tenor de la reciente ampliación de la Iniciativa Mérida en dos mecanismos complementarios como son la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe y la Iniciativa de Seguridad Regional de América Central.

La primera, con una dotación final de 37.1 millones de dólares para 2010, tiene como principal destino la lucha contra el tráfico ilícito y el fortalecimiento de la seguridad pública en los países del Caricom y la República Dominicana. Por su parte, la Iniciativa de Seguridad Regional de América Central responde a la preocupación de que Centroamérica se haya consolidado como el tránsito natural por el que circula 90% de las drogas que llegan a Estados Unidos. Así, la porosidad fronteriza, la debilidad institucional, la corrupción acuciante y la presencia creciente de cárteles mexicanos en Centroamérica obligaron a que la Iniciativa Mérida se ampliara en junio de 2010, incluyendo una partida presupuestaria de aproximadamente 200 millones de dólares.

Pese a todo, existe una gran incertidumbre en relación a la idoneidad de este tipo de estrategias reactivas, basadas fundamentalmente en la cooperación policial-militar y en el fortalecimiento institucional. Así lo planteó, entre septiembre y noviembre de 2010, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia —formada, entre otros, por los ex presidentes latinoamericanos Carlos Gaviria, Henrique Cardoso y Ernesto Zedillo—, que propuso la consideración de posibles alternativas como la legalización de ciertas drogas y el desarrollo de una estrategia más preventiva, centrada no tanto en la reducción de la demanda y sí más en la reducción del daño a tenor de la preocupante correlación existente entre tráfico de drogas y homicidios.¹

Por último, en lo que tiene que ver con el tráfico de armas y la accesibilidad a éstas que encuentra la sociedad civil, según UNODC (2011b), Honduras presenta la tasa de homicidios cometidos con armas de fuego más elevada del continente (96%), seguida de El Salvador (88%), Guatemala (84%), Colombia (80%) y Brasil (76%).

Quizá así se entienda el hecho de que América Latina, tal y como informa la Fundación Arias para la Paz y el Progreso (2010), sea el lugar

1. Por ejemplo, sólo en México se estima que 95% de los homicidios son cometidos entre integrantes de los diferentes cárteles narcotraficantes.

del mundo en el que existe una mayor asociación entre muertes violentas y armas de fuego, con un impacto sobre la tasa de homicidio de 15.5 por cada cien mil casos, lo que supone el doble que África (7.5 por cada cien mil habitantes) y casi cuatro veces más que Estados Unidos y Canadá (3.9 por cada cien mil habitantes).

Igualmente, UNODC (2011b) estima que en 2010 circularon en torno a tres millones de armas de fuego en Centroamérica, las cuales se concentrarían en Guatemala (54%), Honduras (14%) y El Salvador (8%), y donde aproximadamente 60% provendrían del tráfico ilícito.

Así, buena parte del tráfico de armas que acontece en Centroamérica derivaría de los remanentes de los conflictos armados de la década de 1980, abasteciendo principalmente a cárteles mexicanos y grupos armados irregulares de Colombia, e incluyéndose en un intercambio de drogas y armas que viene desarrollándose con normalidad desde la década de los noventa. A todo ello se añadiría la transferencia de armas del sector público al privado como consecuencia del auge de la seguridad privada en Centroamérica, copada por ex militares y ex policías que ponen de manifiesto lo imperante de la debilidad institucional y la falta de mecanismos de control regulatorios.

Expresiones dominantes de la violencia en la sociedad latinoamericana

Dado el carácter residual de la violencia política, la escasa probabilidad de violencia entre Estados y la importancia de ciertos condicionantes como la exclusión social, el narcotráfico o el tráfico de armas de fuego, el problema de la violencia en América Latina debe interpretarse como una cuestión de orden interno y representación transnacional.

No obstante, el auge de la violencia y la inseguridad como constantes de la realidad social latinoamericana se comprende en buena medida como resultado del proceso de adaptación de los regímenes democráticos en la década de los ochenta y noventa a las exigencias del neoliberalismo económico. Ello trajo consigo la dificultad manifiesta del Estado de Derecho latinoamericano por conferir recursos y seguridad a su sociedad civil y disponer del control territorial y del monopolio legítimo de la violencia.

Según UNODC (2011b), en el mundo se cometieron un total de 468,000 homicidios en 2010, de los cuales en el continente americano se concentraron 144,000, esto es 27%. A su vez, la tasa global de homicidios por cien mil habitantes fue de 6.9; una cifra muy alejada de los 15.6 del

continente americano, tan sólo superada por el continente africano, con un valor de 17.4.

Para mayor concreción: si en el año 2000 la tasa de homicidios en América Latina era de 20 muertes por cada cien mil habitantes, en 2010 se alcanzaban los 23 homicidios. Así, tras la subregión surafricana,² que es la más violenta del mundo, los ocho Estados centroamericanos y los trece suramericanos presentan unas tasas de homicidios sumamente preocupantes, de 25 y 21 por cada cien mil habitantes respectivamente, y que hacen del continente latinoamericano el más violento e inseguro del mundo.

México, Guatemala, Honduras y El Salvador oscilan entre los 40-50 homicidios por cien mil habitantes, muy alejados de los 12 de países como Costa Rica, Nicaragua o Panamá. En la región andina, igualmente Colombia y Venezuela superan la cifra de los 40 homicidios por cien mil habitantes, duplicando los registros de Ecuador y Bolivia, y muy alejados de los ocho que presenta Perú. Finalmente, el Cono Sur es el que arroja cifras más benévolas en lo que a tasa de homicidios se refiere si bien, por un parte Chile, Uruguay y Argentina se mantienen por debajo de la media mundial referida de 6.9, mientras que Paraguay asciende a los 15 homicidios por cien mil habitantes y Brasil a los 22 (UNODC, 2011b; Costa, 2012).³

Otra expresión de la violencia no menos importante sería el secuestro. En abril de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informaba que las dos terceras partes de los secuestros que anualmente se producen en el mundo se dan en América Latina. Esto tiene especial relevancia en México, donde el secuestro se vincula con la trata de personas y el reclutamiento de éstas para formar parte de la actividad narcotraficante de los cárteles. Sólo entre abril y septiembre de 2010, la Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana denunció el secuestro de 11,333 migrantes, de los cuales 45.3% eran hondureños, 16.2% salvadoreños, 11.2% guatemaltecos y 10.6% mexicanos (Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2011, p. 22).⁴

En Colombia, otro tradicional escenario de secuestros, con motivo de los avances en materia de seguridad pública éstos han caído en 82%

2. Botsuana, Lesoto, Namibia, Sudáfrica y Suazilandia.

3. El límite que cifra la oms para hablar de “epidemia de violencia” es de 10 homicidios por 100,000 habitantes.

4. Dos casos especialmente reveladores del alcance de los secuestros en México fueron el hallazgo de una fosa con 72 cadáveres de inmigrantes centroamericanos en agosto de 2010, y el secuestro por parte del cártel de los Zetas, en diciembre de 2010, de 40 inmigrantes que se dirigían al norte de México en un tren de carga.

en comparación con los registros en 2002. Igual sucede con los atentados terroristas, que se han reducido en 84%, y los homicidios, que lo han hecho 45%. Sin embargo, y a efectos de violencia, la persistencia del conflicto armado sigue traducándose en el último año 2010 en más de 20,000 combatientes entre insurgencia y paramilitares, 280,000 desplazamientos —es el país del mundo con más desplazamiento interno—, 784 casos de violencia armada y más de mil violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (Ríos, Bula y Brocate, 2012).

Otra manifestación de violencia, dentro de las múltiples que se podrían referir para América Latina, sería los linchamientos, que además de poner en entredicho los mecanismos garantes de justicia de acuerdo al imperio de la ley, han cobrado especial relevancia en Guatemala y México —donde se relacionan, cada vez más, con el crimen organizado—, y en Bolivia, donde en junio de 2010 ya se habían alcanzado los 15 casos que se dieron para todo el año anterior, cuestión aparte de los 77 casos que fueron evitados por intervención de la fuerza pública.

Igualmente, y gracias a la mayor visibilidad y reconocimiento legal experimentada en los últimos tiempos, la violencia doméstica plantea un importante reto en cuanto a la reducción de un tipo de violencia, tradicionalmente normalizado, en parte de la vida cotidiana latinoamericana. Sobre la base reinante del patriarcado familiar, en muchos lugares el núcleo doméstico sigue siendo un importante escenario de reproducción y desarrollo de la violencia. Según ONU Mujeres (2011) en países como Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador o Perú, entre una cuarta parte y una tercera parte de las mujeres reconocen haber sido víctima de un caso de violencia física, psicológica o sexual. Del mismo modo, es preocupante otro tipo de violencia como es la derivada del matrimonio de impúberes, que en algunos casos termina por afectar a un porcentaje muy elevado de población juvenil, tal y como es el caso de Nicaragua (41%), República Dominicana (40%), Honduras (39%), Bolivia (36%) o Guatemala (35%).

Preocupación por la delincuencia y militarización de la seguridad ciudadana

A tenor de tan reveladoras manifestaciones de violencia e inseguridad, ésta se ha convertido en la preocupación más importante de la sociedad civil de América Latina, y en una de las prioridades fundamentales de

los gobiernos de la región. Éstos han utilizado la Cumbre de Ministros de Seguridad Pública de las Américas como referente para desarrollar mecanismos de coordinación y cooperación en materia policial y de fortalecimiento de la seguridad ciudadana.⁵

En lo referente a la sociedad civil, los resultados del último Latino-barómetro para 2010, revelan que 58% de los latinoamericanos reconoce sentir inseguridad, a la vez que 27% identifica la delincuencia como el problema más importante de su país. Esta última afirmación compartida, en doce de los dieciocho países en los que se realiza la encuesta, tiene mucho que ver con la valoración media de las políticas de seguridad pública del continente. Así, sólo 37% de los latinoamericanos aprueba a sus respectivos gobiernos en lo referente a gestión de la seguridad ciudadana y lucha contra el crimen,⁶ y únicamente 16% reconoce que en su país la seguridad ciudadana es satisfactoria. Los registros más elevados los obtuvieron Nicaragua (32%) y Honduras (25%).

Quizá esta conjunción derivada por la violencia y la inseguridad explique la emergencia de un fenómeno que en los últimos años viene ganando fuerza en la esfera de la seguridad pública de algunos Estados latinoamericanos, como es la militarización de la seguridad ciudadana.

La presencia creciente de las Fuerzas Armadas en la protección de la seguridad ciudadana contraviene la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aboga porque la seguridad interna quede exclusivamente en manos de civiles, mejor preparados en el tratamiento de la violencia. En otras palabras, optar por la militarización representa en sí una involución de los valores democráticos.

Sin embargo, luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico de manera directa y reactiva parece ser una razón de peso que justifica la emergencia de nuevas guerras (Kaldor, 2001) proyectadas *ad intra* del Estado, donde la militarización se justifica como factor de superación del problema. Así sucede, por ejemplo, en Colombia y México, donde además converge una muy buena consideración de las Fuerzas Armadas dentro del imaginario colectivo de la población civil, junto con una percepción corrupta y clientelista de la policía (Latinobarómetro, 2011).

En Brasil el ejército protagonizó, en diciembre de 2010, un operativo sin precedentes —en coordinación con la policía— para hacer frente a

5. La I Cumbre se celebró en 2008. En 2010, principalmente tuvieron lugar los trabajos preparatorios para la III Cumbre, prevista para noviembre de 2011 en Trinidad y Tobago.

6. Únicamente aprueban Colombia (61%), Nicaragua (58%) y México (54%).

un grupo de narcotraficantes sublevados en las favelas de Río de Janeiro e, igualmente, se pueden encontrar políticas de seguridad pública, amparadas en la militarización de la lucha contra las maras centroamericanas, en los casos de “Cero Tolerancia”, “Operación Libertad” y “Libertad Azul” en Honduras, “Mano Dura” y “Súper Mano Dura” en El Salvador o “Plan Escoba” en Guatemala.

Dos últimos casos paradigmáticos son Perú y Venezuela. El primero, porque en 2010 ha aprobado una serie de medidas orientadas a instaurar un nuevo código penal militar que prevé archivar los supuestos crímenes contra los derechos humanos que no tengan sentencia en un plazo inferior a tres años; reconocer competencias al ejército en materia de seguridad ciudadana contra “grupos hostiles”;⁷ e instaurar de un modelo tradicional de justicia militar.

Por su parte, en Venezuela, donde el Observatorio Venezolano de Violencia (2011) habla de 17,600 homicidios y 875 secuestros, el gobierno de Hugo Chávez ha terminado por reformular profundamente el ámbito de la seguridad ciudadana en pos de una mayor militarización. Primeramente, politizando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al reconocer el mismo mandatario la necesidad de disponer de una Fuerza Armada “mucho más radicalmente revolucionaria” (*El Universal*, 24 de noviembre de 2010). Por otro, llevando a cabo un profundo proceso de modificación de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que en diciembre de 2010 había incorporado hasta 48 cambios.

El objetivo es espolear la función de la Milicia Nacional Bolivariana a fin de que, construyendo el socialismo, tenga la capacidad de asumir funciones de policía administrativa y de indagación, disponer de armamento —lo que a efectos militares la equipara a Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional—, y obtener un mayor protagonismo dentro del orden interno, la seguridad ciudadana y la observación electoral (Jácome, 2010). No obstante, y pese a que todavía está por verse el alcance de la reforma, la militarización prematura de parte de la sociedad civil venezolana parecen vaciar de sentido tanto las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como de la propia Ley del Servicio de Policía y Cuerpo Nacional de Policía, donde queda reconocido expresamente el carácter civil y profesional de la función policial.

7. Dada la imprecisión del término, se corre el riesgo, por ejemplo, de criminalizar las protestas sociales.

Conclusión

Conforme a lo expuesto y sugerido, queda constancia de cómo la inseguridad y la violencia representan un binomio indisociable que lastra y dificulta el desarrollo institucional de parte del Estado de Derecho en América Latina. Es la propia ausencia del Estado o su desnaturalización la que sirve de condicionante fundamental para que inseguridad y violencia resulten la principal preocupación de los latinoamericanos por un lado y, por otro, condicionen un fenómeno creciente de militarización en cuanto a la seguridad ciudadana.

Los esfuerzos por generar espacios regionales y subregionales de convergencia y coordinación de políticas públicas de seguridad y fortalecimiento del Estado han sido una constante en los últimos años y, por ende, también en 2010. Sin embargo, pese a los compromisos adquiridos y el reconocimiento de la necesidad de fortalecer la dimensión social sobre la que reposa la violencia en aras de desarrollar estrategias preventivas que benefician a los sectores de la sociedad más vulnerables, la realidad sigue siendo bien distinta.

Predomina un componente policial-militar eminentemente reactivo, resultante en buena medida por el influjo de Estados Unidos en la región, y que hace que a corto plazo, no quepa esperar cambios sustanciales en lo que tiene que ver con las políticas de reducción de la violencia en América Latina.

Así, el componente preventivo de desarrollar políticas de atención temprana de la violencia; de prevención frente al abuso de drogas y alcohol o la exclusión social; de desmantelamiento de la estructura familiar-patriarcal o de consecución de un mayor fortalecimiento institucional del Estado de Derecho sobre la base de una mayor capacidad persecutoria del delito y un mejor empleo, por ejemplo, de las medidas de prevención de libertad de acuerdo a mecanismos alternativos, más flexibles, modernos y eficientes, siguen siendo un conjunto de buenas intenciones desvirtuado por la urgencia y el cortoplacismo. Todo ello, por tanto, no invita a esperar que en los sucesivos años prospere una reducción considerable en lo que a presentación de la inseguridad y la violencia en América Latina se refiere.

Bibliografía

- Arriagada, Irma y Godoy, Lorena (1999). Seguridad ciudadana y violencia en América Latina: diagnóstico y políticas en los años noventa. *Serie Políticas Sociales*, núm. 32. Santiago de Chile: CEPAL.
- Banco Interamericano de Desarrollo (1998). *Violencia en América Latina y el Caribe: un marco de referencia para la acción*. Washington: BID, Departamento de Desarrollo Sostenible.
- Benítez, Raúl y Rodríguez, Armando (2011). México: perspectivas de la estrategia del combate al crimen organizado, opinión pública y sociedad civil. En H. Mathieu y C. Niño (eds.), *Seguridad regional en América Latina y el Caribe. Anuario 2011* (pp. 127-141). Bogotá: Fundación Friedrich Ebert.
- Buvinic, Mayra, Morrison, Andrew y Shifter, Michael (1999). *La violencia en América Latina y el Caribe: un marco de referencia para la acción*. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo.
- CINEP (2011). *Informe especial. "Falsos positivos 2010": clamor por la vida y la justicia*. Bogotá: Cinep.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2010). *Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos*. Washington: CIDH.
- Comisión Nacional de Derechos Humanos (2011). *Informe especial de secuestro de migrantes en México*. México: CNDH.
- Corporación Latinobarómetro (2011). *Informe de 2010*. Santiago de Chile.
- Costa, Gino (2012) *La Situación de la Seguridad Ciudadana en América Latina*. Inter-American Dialogue Working Paper. Recuperado el 20 de mayo de 2012 de: <http://www.thedialogue.org/PublicationFiles/GinoCostaSpanishFINAL.PDF>.
- El Universal* (2010). AN, gobierno y Fanb deben ser de extrema izquierda. Caracas, 24 de noviembre.
- Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano (2010). *Mecanismo de control de armas de fuego y municiones en el ámbito interamericano: \$57400 millones de gasto militar en América Latina 2009*. San José de Costa Rica: FAPPH.
- Jácome, Francine (2011). Venezuela, 2010: entre los desafíos de la seguridad nacional y la seguridad ciudadana. En H. Mathieu y C. Niño (eds.), *Seguridad regional en América Latina y el Caribe. Anuario 2011* (pp.175-190). Bogotá: Fundación Friedrich Ebert.
- Kaldor, Mary (2001). *Las nuevas guerras*. Barcelona: Tusquets.
- López, Claudia (2011). Conflicto, crimen organizado y procesos de construcción de Estado en Colombia. En H. Mathieu y C. Niño (eds.), *Seguridad regional en América Latina y el Caribe. Anuario 2011* (pp. 215-231). Bogotá: Fundación Friedrich Ebert.
- ONU Mujeres (2011). *El progreso de las mujeres en el mundo. En busca de la justicia*. Nueva York: UN Publications.

- Organización de Estados Americanos (2011). *Informe sobre Seguridad Ciudadana en las Américas 2011*. Washington: OEA.
- Preciado, Jaime A. (2009). Agendas geoeconómicas y geoestratégicas de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de Norteamérica (ASPAN): cuestionamientos al modelo neoliberal. *Noticias Geográficas*, 69. Recuperado el 20 de octubre de: <http://www.revistas.unam.mx/index.php/rig/issue/view/1452>.
- Ríos, Jerónimo, Bula, Germán y Brocate, Roberto (2012). Estado de Derecho y Violencia Armada en Colombia (2000-2010). Ponencia en el *VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política*. Quito, junio.
- Rojas, Francisco (2011). Violencia en América Latina: La inequidad, el crimen organizado y la debilidad estatal inhiben el desarrollo humano. En F. Rojas y A. Álvarez Marín (eds.), *América Latina y el Caribe: globalización y conocimiento. Repensar las ciencias sociales* (pp. 311-359). Montevideo: Flacso-UNESCO.
- Ruz, María Inés (2011). El Consejo de Defensa Suramericano a dos años de su instalación. En H. Mathieu y C. Niño (eds.), *Seguridad regional en América Latina y el Caribe. Anuario 2011* (pp. 3-10). Bogotá: Fundación Friedrich Ebert.
- Serbín, Andrés (2011). La administración Obama y la agenda hemisférica. En M. Mesa (coord.), *Balance de una década de paz y conflictos: tensiones y retos en el sistema internacional. Anuario Ceipaz 2010-2011* (pp. 227-252). Madrid.
- UNODC (2011a). *Colombia. Monitoreo de cultivo de coca en 2010*. Bogotá: UNODC.
- UNODC (2011b). *Global Study on Homicide. Trends, Context and Data*. Viena: UNODC.